

ARTICULOS

EL PROYECTO CONTRAINSURGENTE ESTA CONDENADO AL FRACASO

Guillermo Manuel Ungo

RESUMEN

La guerra es un terremoto permanente agravado por el terremoto del 10 de octubre. El terremoto permanente ha sido alimentado y mantenido por intereses ajenos a los salvadoreños. Se encuentra ubicado dentro de un plan contrainsurgente donde es vital mantener a Centroamérica como el patio trasero de Estados Unidos, bajo la forma de un protectorado. Este plan, sin embargo, ha entrado en franca contradicción con la idea de democracia occidental y con la idea de nacionalismo.

Si bien la solución del terremoto permanente tiene elemento puramente militares, el conflicto es de naturaleza esencialmente política y no puede ser resuelto en términos estrictamente militares. Por lo tanto, Ungo explica, desde el FDR, la actual situación política y sus alternativas. Ante el fracaso del plan contrainsurgente es evidente que ahora toca al pueblo salvadoreño explorar otras vías, aprovechando las coincidencias existentes.

1. Características y objetivos de la contrainsurgencia

Desde el triunfo de la revolución cubana, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos se han dedicado a elaborar y perfeccionar, en aras de lo que llaman su "seguridad nacional," una estrategia de contrainsurgencia para ejecutarla en los países de América Latina y principalmente de Centroaméri-

ca. En el fondo se trata de aplicar a nuevas situaciones los viejos, pero siempre presentes conceptos del destino manifiesto de la potencia imperial y de la doctrina Monroe, bajo la consideración de que pertenecemos a su "patio trasero."

Por definición, la contrainsurgencia considera a nuestros pueblos como el enemigo interno a combatir, a sangre y fuego si es necesario para evitar que éstos, dada la situación de injusticia, opresión y

represión que viven, realicen movimientos insurgentes de liberación e independencia y modifiquen esas situaciones antipopulares y antidemocráticas. De ahí que la estrategia de contrainsurgencia sea compartida por la potencia imperialista y las oligarquías nacionales.

En tal sentido, los términos liberación, democracia e independencia se requieren entre sí, ya que con una estructura democrática de poder, es decir, con un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lógicamente la situación estructural de nuestros países se "subvertiría," modificando su carácter oligárquico-militar y dependiente del imperio. Por eso, en El Salvador la democracia ha sido considerada "subversiva" por los sectores minoritarios dominantes y, por consiguiente, los que la proclaman y defienden son sujetos de persecución, cárcel y muerte.

En América Latina la lucha contrainsurgente ha tenido algunos éxitos, como en Bolivia con la ejecución del Che Guevara. Sin embargo, esas victorias no pueden atribuirse estrictamente a la eficacia de la contrainsurgencia, sino más bien a la falta de un verdadero y poderoso movimiento popular insurgente. El mejor ejemplo lo encontramos en Nicaragua con el triunfo de la revolución sandinista, a pesar de más de 20 años de experiencia contrainsurgente de la superpotencia que tan estrechamente estaba vinculada con Somoza (*He is a son of a bitch, but is our son of a bitch*).

La estrategia de contrainsurgencia en El Salvador actualmente ha ido asimilando críticamente y

corrigiendo otras experiencias, como la de Viet Nam, así como la propia experiencia salvadoreña de los primeros años de guerra (1981-1984). Se ha complejizado y sofisticado, articulando los diferentes componentes militares, políticos, diplomáticos, económicos y propagandísticos, todo ello al servicio del objetivo de mantener y fortalecer el papel de Estados Unidos como potencia dominante y el de nuestro país dominado, domesticado, convertido de hecho en un protectorado.

Esto es así porque Centroamérica se ha convertido en esta década en el escenario principal donde luchan y disputan los intereses hegemónicos de la potencia norteamericana y la voluntad de nuestros pueblos de decidir sus propios destinos. El ascenso de la lucha popular ha obligado al gobierno de Reagan a descansar abiertamente en el terrorismo de Estado, en la violación de las normas internacionales, en el intervencionismo descubierto y abierto, a fin de tratar de contener ese ascenso popular.

Se trata de mantener en Centroamérica una situación de protectorado, donde el Estado protegido tiene claramente marcados sus límites de acción y comportamiento, señalados por el Estado protector, en función de sus intereses económicos y geopolíticos. Por eso Reagan ha dicho públicamente que no acepta la revolución sandinista; y por eso implantó y apoya al régimen de Duarte en El Salvador. Y por eso se ponen a funcionar todos los mecanismos, abiertos y encubiertos de intervención militar, económica, diplomática y política, en lo que han denominado el manejo de "conflictos de baja intensidad."



Los elementos políticos del protectorado se conciben como un Estado sometido a la voluntad de un poder superior, con autonomía en tanto el Estado protegido no atente en contra de los intereses del Estado protector. La autonomía del Estado protegido no va más allá de los límites trazados por el Estado protector.

La relación de protectorado se ha ido profundizando no sólo con la intervención creciente en cada uno de los países centroamericanos, especialmente en Nicaragua, Honduras y El Salvador, sino con una visión y un plan de carácter regional.

El Plan de la Cuenca del Caribe constituyó un nuevo paso en esa dirección, independientemente de su relativo fracaso. Lo factual pretende convertirse en *de jure*. Estados Unidos, por medio de ese instrumento, califica por sí y ante sí a los estados que se beneficiarán con el plan y excluye por razones políticas a los que no aceptan la condición de país protegido. También impone 18 condiciones para ser beneficiarios del plan, en función de los intereses de la potencia imperial. Asimismo, la política económica de los países de la Cuenca del Caribe tienen que conformarse con las pautas dictadas por el Estado protector.

El Informe Kissinger plantea una fase superior de la relación de protectorado, pues ya no solamente hace referencias económicas, sino que se extiende a todos los ámbitos de la actividad de un país, comprendiendo lo político, económico, militar, social y cultural. Además, dicho *Informe* tiene una dimensión geo-política mayor al referirse no sólo a los países centroamericanos, sino también a Belice y Panamá.

De acuerdo con el plan Kissinger, los estados protegidos para beneficiarse de la ayuda del protector deben firmar acuerdos de implementación que los van supeditando por pactos jurídicos. El organismo administrador de la relación de protectorado, el CADO, en manos estadounidenses, tiene una clara estirpe imperial, con muy poco cosmético latinoamericano.

La conversión de Honduras en un territorio militarmente ocupado por Estados Unidos, con bases militares permanentes, y las maniobras militares permanentes, con presencia igualmente permanente de flota de guerra estadounidense en aguas territoriales de Honduras, Nicaragua y El Salvador, constituyen otros factores más para asegurar la relación de protectorado. Recientemente, esta relación se quiso fortalecer con la asignación del Congreso de Estados Unidos de un paquete de 300 millones

de dólares a ser repartido por igual entre Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador, como premio por buen comportamiento.

No se trata, pues, de manejos aislados ni caprichosos, sino de una concepción amplia e integral. Con esa lógica Reagan no puede "perder" Nicaragua, ni El Salvador, ni ningún otro país centroamericano, porque de ser así, se derrumba la situación de protectorado; y Centroamérica, y América Latina, al asumir una vida plenamente soberana e independiente, derrotarían al nuevo monroísmo reaganiano.

El "conflicto de baja intensidad" es una modalidad de guerra contrainsurgente que pretende evitar los problemas y costos políticos militares, económicos y diplomáticos que la guerra de Viet Nam significó al gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con los estrategias del Pentágono ese es el tipo de guerra que se está aplicando en Nicaragua y El Salvador en contra de las fuerzas revolucionarias.

No pretendemos analizar el significado y contenido de los "conflictos de baja intensidad," sino señalar únicamente sus principales objetivos y contradicciones intrínsecas. En términos simples podríamos decir que se trata de "tirar la piedra y esconder la mano," o sea, intervenir de una manera tal que sean los recursos "nacionales" los que saquen la cara y pongan los muertos.

Las armas, el entrenamiento militar, los planes militares y económicos, la estrategia político-militar, la conducción político-militar e incluso la dirección militar operacional, todo ello, está a cargo del gobierno interventor: Estados Unidos. El ejército, el factor humano, es el aporte local. De esa manera, en El Salvador, como en Honduras, se está produciendo un proceso de "desnacionalización," o de "titerización" de los factores internos del poder. En las actuales circunstancias no vale la pena discutir sobre nacionalizaciones en la actividad económica, cuando lo primero y más importante que hay que nacionalizarse es el gobierno, como lo ha dicho un distinguido político hondureño.

En el plan contrainsurgente lo militar y lo político están íntimamente vinculados, pero claramente el esfuerzo principal, cuantitativa y cualitativamente, recae en el factor militar. Esto es evidente, pues se trata de derrotar a una insurgencia armada a fin de imponer un proyecto anti-nacional y anti-popular. De ese modo, elecciones, constitución, diálogo, democratización, no tienen ningún contenido real, sino que son meros juegos de apariencias para viabilizar el proyecto contrainsurgente.

Tanto los "yo voté por él," como los "yo no voté por él" coinciden en que Duarte se vaya.

te. No se pretende lograr ningún consenso nacional real, ya que éste sería adverso a los objetivos de la superpotencia.

Este aspecto se aprecia con mayor claridad en el plan "Unidos para reconstruir," destinado a ganar "mentes y corazones" para una mejor eficacia de las acciones militares anti-guerrilleras. Se busca a la vez la unión de las derechas, incluida la democracia cristiana, pretensión presente desde hace varios años, desde el gobierno presidido por Alvaro Magaña, con el famoso pacto de Apaneca.

El gobierno de Reagan quiere imponer esta unidad al considerar que, existe un enemigo común: el FDR y el FMLN, es decir, las clases populares progresistas y mayoritarias que no se benefician de un proyecto de minorías y para minorías. Sin embargo, a ninguno de los factores políticos internos le gusta ser domesticado y subordinado; y la oligarquía no quiere conformarse con la pérdida de su hegemonía a favor del binomio Reagan-democracia cristiana.

Resulta, por consiguiente, fuente de contradicciones aplicar un plan político para fines ajenos o entregarle su conducción al principal partido político, la Fuerza Armada, en demérito de la democracia cristiana y de los otros partidos de la derecha.

Otra incongruencia se observa con el manejo del "conflicto de baja intensidad" que no puede esconder quién tira la piedra, o sea, encubrir la creciente participación militar, política, económica y diplomática del agente externo, de la potencia imperialista. Ahora se envían 2 millones de dólares diarios de ayuda, principalmente para fines militares; se reciben visitas frecuentes de los más altos personeros del gobierno de Estados Unidos, girando instrucciones sobre cómo comportarse internamente y con relación a Nicaragua y Contadora; se imparten órdenes para implantar sucesivos paquetes de reformas fiscales. Todo lo anterior exhibe una *alta intensidad* de intervención, con rendimientos decrecientes, hasta el grado que si no se acepta una solución negociada del conflicto sólo puede optarse por una intervención militar masiva directa de Estados Unidos, como paradójico remate de la guerra de "baja intensidad."

Como si lo anterior fuera poco, a partir del 10 de octubre del año pasado nos encontramos en una

lamentable situación de guerra con terremoto y de terremoto con guerra. Quiere decir que no se trata de la situación de Nicaragua, Guatemala o México que sufrieron los efectos dañinos de violentos sismos, sino que vivimos una experiencia diferente, más aguda y crítica, ya que la guerra es un terremoto permanente, que se agravó con el terremoto del 10 de octubre pasado; en consecuencia, la ayuda millonaria para aliviar los efectos del terremoto resulta muy reducida ante las necesidades de la guerra. El plan "Unidos para reconstruir" requeriría otro super plan, "Más unidos para reconstruir más." Ello sólo es posible con un nuevo gobierno, de amplio consenso nacional, con un verdadero proyecto nacional y en una situación de paz conquistada con el esfuerzo de los sectores y fuerzas mayoritarias del país, en una expresión del más amplio pluralismo.

2. ¿Qué decíamos hace un año?

Los últimos 6 años representan toda una etapa de nuestra lucha. Queremos hacer, de entrada, una aclaración. No solamente es una lucha de la guerrilla revolucionaria, con sus características peculiares, concretamente las que suponen la intervención de la potencia imperialista. Incluye también componentes de lucha política, los internos y los internacionales, en una alianza pluralista, ya que el agente externo es el principal factor de poder del régimen oligárquico y militar, con fachada demócrata cristiana.

A principios de 1986 grabamos un mensaje para la televisión salvadoreña, el cual desgraciadamente no pudo ser conocido por el público televisivo, debido a la censura y auto-censura existente y aplicada únicamente a las organizaciones de izquierda que no pueden funcionar en el esquema del régimen de la "democracia de las derechas y para las derechas."

En dicho programa hacíamos un balance del año y exponíamos las perspectivas para 1986. En síntesis nos referíamos al tema del diálogo y de la negociación, a nuestra posición favorable a ese respecto, y afirmábamos que el diálogo se mantenía interrumpido entre el gobierno y nuestros frentes, FDR y FMLN, porque el régimen que preside el Ing. Duarte le ha tenido y le tiene miedo al diálogo, ya que lo enfrenta con poderes políticos supe-



riores que se oponen a una solución negociada y lo exhibe a la vez con las masas populares que tendrían la oportunidad de expresarse masivamente a nuestro favor.

Refiriéndonos a las perspectivas para 1986 expresábamos optimismo y confianza, señalando que la situación estaba evolucionando positivamente, a pesar del contexto de guerra, dolor, muerte y destrucción que se prolongaba en el país, por la intervención creciente del gobierno del presidente Reagan. Razonábamos que eran cada vez más numerosos los sectores que asumían un papel protagónico a favor del diálogo y de una solución política justa, porque existía una mayor conciencia de la necesidad de una alternativa diferente. Es decir, hace un año apreciábamos ya un deterioro serio del régimen y de su proyecto político, que hacía agua y se veía en proceso de agotamiento.

Esas perspectivas se han visto ampliamente confirmadas por las realidades de 1986. El desgaste político, económico y social del régimen ha sido creciente, hasta el grado de ser frecuentes los llama-

dos para que Duarte se retire de la presidencia de la república. Estos llamados no sólo proceden de la extrema derecha, sino que también son compartidos por importantes sectores de las clases populares y de las capas medias.

El gobierno de Estados Unidos se empeñó, en un sueño imposible, por crear un "centro" político y una "institucionalidad" permanente sostenidos en la persona de Duarte y en su partido demócrata cristiano. Sucesivas "elecciones" y una "constitución" pretendieron cumplir con ese objetivo.

Lo cierto es que ese "centro" se ha ido desplazando cada vez más a la derecha y que la "institucionalidad" contrainsurgente está en crisis, cuestionada, agrietada. Los mismos que contribuyeron a crearla buscan sucesores que mantengan un tanto las apariencias. Tanto los "yo voté por él," como los "yo no voté por él" coinciden en que Duarte se vaya.

Todo indica que se está formando un acuerdo nacional a favor de una nueva alternativa, con una nueva institucionalidad. Todavía no se perfilan los

elementos de un proyecto político amplio, mayoritario, ni qué sectores patrióticos lo asumirán, trascendiendo los intereses personales y sectoriales en un plano de sacrificios y concesiones recíprocas. Pero el camino se está abriendo. No hacíamos una mala lectura de los signos de los tiempos hace un año.

3. Evaluación político-militar

La mejor manera de evaluar la situación del conflicto político-militar salvadoreño es ateniéndonos a los resultados obtenidos por las respectivas estrategias de cada uno de los dos bandos en pugna. Es preciso, por consiguiente, hacer una distinción entre cumplimiento de los planes y eficacia de los mismos. La verdad es que ambas partes beligerantes, el gobierno y el FDR-FMLN, han ido mejorando sus estrategias y planes y dándoles mayor cumplimiento. De ahí que la respuesta correcta la encontraremos al analizar si se han cumplido los objetivos políticos y militares que las partes se asignaron.

Comenzando por el aspecto militar, sin entrar en consideraciones y análisis propios de los expertos en ese ramo, porque no lo somos, basta medir las palabras con los hechos producidos por los propios interesados. En 1981, el general Haig, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que el conflicto salvadoreño se resolvería en 6 meses. Ese mismo año, el ministro de defensa salvadoreño, general José Guillermo García, también afirmó que el FMLN estaba prácticamente derrotado, reducido a grupos dispersos de "bandoleros," al comentar los resultados de la ofensiva general del FMLN.

Estas afirmaciones ilusas tuvieron que ser corregidas, pero las nuevas versiones también fueron desmentidas por la realidad. En 1982 los expertos del Pentágono afirmaron públicamente que se necesitaba incrementar la ayuda militar y económica para el gobierno salvadoreño a fin de lograr una victoria militar en un plazo de 2 años. Ese incremento se obtuvo. Este mismo plazo de 2 años fue prorrogado por declaraciones semejantes hechas públicas en 1983. Mientras tanto, los altos jefes militares salvadoreños anunciaban permanentes victorias militares en todos los frentes de guerra, especialmente en Guazapa. Si contabilizáramos todas esas informaciones y datos, el FMLN ya no existiría ni en Guazapa ni en ninguna parte del territorio

nacional y habría sufrido más de 30.000 bajas. Magnífica propaganda con efecto *boomerang*.

Desde 1983, cada año volvemos a leer y escuchar los pronósticos triunfalistas del Pentágono y del estado mayor del ejército salvadoreño, dándose un plazo de 2 años para vencer. Y así han pasado 6 años de guerra.

El jefe de los asesores estadounidenses en El Salvador, escribía en una revista norteamericana en 1984, (*The New Republic*) que con 100 millones de dólares anuales en ayuda para El Salvador se ganaría la guerra en 2 años. Ahora, para el período fiscal de 1987 el gobierno de Reagan enviará más de 700 millones de dólares, lo cual significan 2 millones de dólares diarios. Eso nos recuerda el caso de un enfermo grave que se mantenía con vida gracias a permanentes transfusiones de sangre, cuya dosis se incrementaba semanalmente. Se trataba de una estrategia de prolongación de la agonía.

Profundizando más en la evaluación de la situación militar, podemos constatar que efectivamente el ejército gubernamental ha crecido notoriamente. Paradójicamente el FMLN le ha causado más bajas que el número inicial de sus componentes al comienzo de la guerra, pero gracias a la ayuda del gobierno de Reagan, su tamaño se ha más que triplicado. Sin embargo, esa capacidad de crecimiento de la Fuerza Armada se ha ido reduciendo en los últimos 2 años, sin poder sobrepasar los 55.000 efectivos y teniendo que recurrir a medidas políticamente costosas que no puede implementar adecuadamente, como es el reclutamiento forzoso.

También es cierto que el ejército gubernamental ha mejorado su capacidad operacional de una manera importante, haciendo acciones militares casi permanentemente en distintos teatros de guerra. Pero aquí cabe recordar aquellos versos "Tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, quiero amigo que me diga, ¿son de alguna utilidad?" Pues lo importante es juzgar por los resultados. Esa iniciativa táctica únicamente prolonga la definición del conflicto, conteniendo sólo parcialmente los avances del FMLN. La estrategia contrainsurgente se propone aislar, debilitar y arrinconar en la zona norte al FMLN, para luego golpearlo de manera contundente y final. Esto no ha sido posible. Todo lo contrario. Aunque de manera aún insatisfactoria, el FMLN ha ido obteniendo los objetivos de su

La lógica de Reagan no permite "perder" Nicaragua, ni El Salvador, ni ningún otro país centroamericano, porque se derrumbaría la situación de protectorado.

Mientras en el régimen se acentúan las contradicciones y divisiones, en nuestro campo se precisan mejor los términos de entendimiento, de colaboración, de coordinación y la coincidencia de objetivos y estrategias.

estrategia, dispersándose para un accionar permanente de desgaste en mayores teatros de guerra y concentrándose para realizar acciones de mayor envergadura. Como resultados concretos, el FMLN opera ahora en 13 de los 14 departamentos y en la mayoría de ellos de una manera permanente e intensa.

Lo que sí parece claro es que el conflicto salvadoreño, de naturaleza esencialmente política (se trata del problema del poder, oligárquico o democrático), no parece que pueda definirse en el corto plazo, ni aún en el largo plazo, en términos estrictamente militares. Por consiguiente, los factores políticos adquieren relevancia y un sentido de necesidad. Por ello es importante la evaluación de la situación política.

Todo indica que aunque los planes contrainsurgentes se cumplen más o menos, ellos no son eficaces y, por ende, el proyecto contrainsurgente está fracasando y terminará derrotado.

Hace 2 años el gobierno de Reagan parecía muy satisfecho no sólo con su plan contrainsurgente en El Salvador, sino con el traje con que lo había vestido. Era el momento de Duarte y la democracia cristiana. En marzo de 1985 Duarte controlaba el poder ejecutivo y la democracia cristiana había ganado mayoría en la asamblea legislativa. Ofrecieron la continuación del diálogo con el FDR y el FMLN, interrumpido desde el 30 de noviembre de 1984, para ganar votos en las elecciones de diputados. Y no cumplieron.

Sin embargo, en los últimos 2 años el desgaste y el deterioro de Duarte y de su partido han sido notorios y crecientes, así como su debilidad política. Igualmente ha ido perdiendo credibilidad y la corrupción oficial imperante está generando un fuerte desprestigio al gobierno.

En el plano de los hechos, a pesar de la victoria democristiana en las elecciones de marzo de 1985, el gobierno se ha derechizado, pasando del reformismo radical a un minireformismo verbal que se traduce en un minipopulismo tipo acción cívica militar del plan "Unidos para reconstruir," manejado por la Fuerza Armada.

Actualmente El Salvador vive la más profunda crisis económica, política y social de toda su historia. El impacto de esta crisis sobre los sectores popu-

lares es realmente dramático, especialmente en términos de desempleo, escasez, inflación, asistencia médica y mayores impuestos para financiar una guerra que los golpea principalmente a ellos. El terremoto del 10 de octubre vino a producir un agravamiento súbito de esas condiciones y, por lo tanto, a convertirse en un factor más de la aceleración de la crisis nacional.

Apreciamos a un gobierno aislado, perdiendo base social de apoyo, viviendo una insalvable crisis de hegemonía que se ha convertido en una crisis de poder, afectando a todo el régimen en su conjunto, incluyendo a la Fuerza Armada.

En efecto, no se necesita ninguna malicia para descubrir que sectores importantes de la vida social y económica y de la misma Fuerza Armada no ven ninguna viabilidad en el gobierno de Duarte, ni les agrada volver al pasado devolviéndole la hegemonía al sector oligárquico; por otra parte, ni a la Fuerza Armada, ni a la oligarquía, ni a la democracia cristiana les puede agradar el papel de comparas domesticados, subordinados a la hegemonía de Washington.

La crisis política del régimen se expresa en los elementos siguientes: resquebrajamiento de su base política y social; oposición de todos los sectores al gobierno de Duarte; gobierno abierto de los militares; d) profundización de la intervención norteamericana; y fracasó de Duarte como cobertura del plan contrainsurgente.

Por lo anterior, consideramos que en la actualidad existe un amplio consenso entre los más diversos sectores nacionales sobre la necesidad de construir una alternativa política que ofrezca un camino de paz. Independientemente de las diferencias ideológicas y políticas, encontramos los siguientes puntos de coincidencia: el país no puede ser gobernado en la actual situación de guerra y de crisis profunda; el actual proyecto de gobierno está fracasado y no genera el necesario consenso para superar la crisis; el gobierno no tiene ni tendrá capacidad para derrotar militarmente al FMLN y la prolongación de la guerra profundiza la crisis; la solución a la crisis y al conflicto debe ser una solución entre salvadoreños; la injerencia extranjera es un obstáculo fundamental para cualquier solución, es necesario el rescate de nuestra independencia y

soberanía; la solución a la crisis no puede lograrse en los salones cerrados de los sectores minoritarios, sino que requiere la participación amplia de los diversos sectores del pueblo salvadoreño; la solución a la crisis debe asentarse en una verdadera democratización; una verdadera democratización requiere un cambio político en el gobierno; la solución a la crisis requiere la erradicación de la corrupción administrativa; la solución a la crisis requiere un apoyo amplio y pluralista de la comunidad internacional en la recuperación económica, se necesita por consiguiente un gobierno con fuerte respaldo popular y prestigio internacional; la solución a la crisis requiere conquistar una paz justa.

Obviamente estas coincidencias objetivas son un punto de partida y no uno de llegada. El FDR y el FMLN aportaron en julio de 1986 una propuesta con 6 elementos, los cuales constituyen una contribución a la formación de un consenso nacional para una alternativa que no sea exclusiva ni excluyente. Esto se irá posibilitando en el futuro próximo, cuando se vea la nave del régimen más al garete y haciendo más agua.

Esta perspectiva se fundamenta en una evaluación real de la situación actual. El auge del movimiento popular es una realidad indiscutible a partir de 1983. Importantes sectores populares desarrollan, a pesar del clima represivo, crecientes luchas por la defensa de sus intereses económicos y por una solución política del conflicto.

De parte del FDR y del FMLN destacaremos como resultados importantes de su lucha política y militar, la existencia en El Salvador de un doble poder: el poder establecido que tiene una estructura de Estado y el poder popular, que se expresa en capacidad de dirección política asumida por cientos de miles de compatriotas, y asimismo, con una legitimidad internacional. Aunque no somos ni pretendemos ser gobierno en estos momentos, estamos reconocidos como interlocutores autorizados por los países del tercer mundo, del mundo socialista y del mundo occidental. Tenemos relaciones y mantenemos conversaciones con multitud de fuerzas políticas y sus dirigentes, así como con representantes de gobiernos de distintos países, inclusive de signo conservador, liberal y hasta demócrata cristiano.

Otro factor importante y positivo lo constituye la actualización de los términos de la alianza entre el FDR y el FMLN, con el pacto firmado al máximo nivel entre ambos frentes, el pasado 30 de noviembre. Mientras en el régimen se acentúan las

contradicciones y divisiones, en nuestro campo se precisan mejor los términos de entendimiento, de colaboración, coordinación y la coincidencia de objetivos y de estrategia, en un plano de respeto mutuo y preservando nuestras autonomías e identidades, sin renunciar a nuestras propias utopías y proyectos; pero claramente consciente que esta etapa histórica requiere un proyecto nacional, común, amplio, participativo, pluralista, democrático, como única vía para resolver la crisis y el conflicto nacionales.

4. La "democratización" contrainsurgente

El proceso "democratizador" que ha impulsado el gobierno de Reagan en El Salvador es uno de los componentes políticos del proyecto contrainsurgente. Se trata de la "democracia de las derechas y para las derechas", con estado de sitio, persecución política, cárcel y asesinato y sin libertades políticas para todos los que son considerados "insurgentes," "subversivos," o "terroristas." Es interesante recordar que estos mismos epítetos que ahora lanza el gobierno de Duarte a las organizaciones políticas, sociales, sindicales, gremiales, de signo progresista, los recibían también los mismos demócratas cristianos en la década de los 70 cuando éramos aliados y opositores del régimen oligárquico-militar proimperialista de entonces.

Opiniones ingenuas o interesadas, particularmente las cercanas a la democracia cristiana internacional o que tienen exagerada devoción por la democracia de apariencias, creen que en El Salvador se ha producido un modesto proceso democratizador, que ha comenzado con la reactivación política de las derechas y que aún le falta completarse con la inclusión de las izquierdas en la vida política nacional. Las elecciones son el indicador de esa creencia.

Lo cierto es que antes de iniciarse el proyecto contrainsurgente con la participación de la democracia cristiana salvadoreña, las derechas tenían muy poca expresión estrictamente política; su poder se expresaba por medio de sus prepotentes gremios, en el control del gobierno y del aparato del Estado, en sus medios de comunicación social completamente monopolizados y por medio de su ejército oligarquizado. Gracias al gobierno de Magaña y Duarte la derecha creció políticamente, con diversos partidos políticos, aprovechando el cierre del espacio para las fuerzas progresistas y populares. El terrorismo de Estado en escala masiva, con 60.000 asesinados, se encargó del funcionamiento

de esta "democracia" exclusiva y excluyente. No olvidemos que Somoza hacía elecciones y que Stroessner es producto de la "democracia" electoral paraguaya.

Por eso consideramos importante hacer unas precisiones y distinciones entre lo que es democratización, apertura democrática, apertura política o simplemente la existencia de algunos espacios de acción social o política.

Mal puede hablarse de democratización cuando existió una guerra de contrainsurgencia en la que el enemigo interno a combatir es el pueblo en sus mejores expresiones, es decir, los sectores organizados más oprimidos y explotados, que precisamente por haber sido excluidos violentamente, con represión y muerte, de su participación en la vida política, económica y social, han tenido que optar, por legítima defensa y derecho de supervivencia, por la vía insurgente armada, después de décadas de sufrir fraude, persecución, tortura, cárcel, exilio, muerte, primero por centenas y luego por millares.

Mal puede hablarse de democratización con una estructura de poder donde la maquinaria de asesinar está intocable, funcionando de acuerdo a las necesidades e intereses de los sectores minoritarios dominantes. Claro está que después de asesinar varias decenas de miles de compatriotas, al igual que lo hizo Pinochet en un principio, después se selecciona y se organiza con más eficacia el terrorismo de Estado. El mejor ejemplo de esta situación lo encontramos en los crímenes políticos que nunca tienen responsables, como si se tratara de un ángel exterminador que baja todos los días del cielo. Ningún salvadoreño consciente ignora que se trata de una articulación no sólo funcional, sino orgánica, de los llamados "escuadrones de la muerte," con el aparato militar represivo del régimen. No es casual que con estado de sitio, los crímenes políticos se cometen cuando el ejército y los cuerpos de seguridad controlan las ciudades y las calles, especialmente de noche.

Ni siquiera podemos hablar de apertura democrática, pues el proceso político se abrió sólo para los fascistas y derechistas en general. Duarte nos invitó a participar en elecciones, en un planteamiento falso, hipócrita y torpe. Todos entendieron que se trataba de una invitación al suicidio colectivo. Hacerse presente para ser asesinado. Una burla sangrienta. En el mejor de los casos, la invitación podría considerarse una burla propia de cristianos fariseos, que le amarran a uno las manos y luego lo invitan a jugar baloncesto. No olvidemos que la

estructura de poder, incluido el alto mando militar, nos trata como "subversivos" sujetos de persecución, cárcel y muerte. Los cementerios dan fe de ello.

Por eso tampoco puede considerarse que el régimen de Duarte haya realizado una simple apertura política, restringida y controlada, como es el caso de Guatemala, donde algunas fuerzas políticas de la izquierda moderada y bien portada pueden participar en la vida política, aunque se mantiene la exclusión de las que pueden constituir un mayor peligro a la modificación del *statu quo*. Es decir, bienvenidos mientras no sean peligrosos a nuestros intereses.

Pues bien, el régimen de Duarte no puede darse ese pequeño lujo. Su poder es tan débil y precario, que una mínima participación abierta nuestra le rompe su equilibrio inestable y lo deja en una crisis mayor y más acelerada. No olvidemos que la democracia cristiana salvadoreña se ha aprovechado de la función política de la represión para ocupar temporalmente algunos espacios nuestros, bajo el espejismo de ofrecerse como el mal menor que el pueblo tiene que escoger. El problema que confrontan Duarte y la democracia cristiana salvadoreña radica en su creciente aislamiento y debilitamiento, pues cada vez se hace más difícil que los acepten como mal menor, en medio de una crisis económica, social y política más aguda. Al fin y al cabo, es preferible luchar por un bien que escoger un mal que nos golpea directa y profundamente a todos.

Por si quedaran dudas de la imposibilidad de que el actual régimen ofrezca siquiera una apertura política, basta leer las declaraciones y discursos de los principales funcionarios demócratas cristianos, cada día más amenazantes, acusando a medio mundo de ser "subversivo."

La imagen de Duarte como demócrata, cristiano y dialogante se está perdiendo. Su responsabilidad en el proceso represivo contra-insurgente, anti-democrático y anti-popular es evidente. Su incapacidad de desarrollar un diálogo serio y de cumplir con los acuerdos a que llegamos con él y sus representantes en las reuniones de La Palma y Ayagualo, interrumpiendo el diálogo por más de 2 años, le quitan credibilidad de hombre de paz. Y en cuanto a su conducta como cristiano (no juzgamos sus pensamientos ni deseos), vale la pena recordar un artículo periodístico de Gabriel García Márquez donde ponía el cristianismo de Duarte en los miles de salvadoreños que había enviado al

cielo, refiriéndose a su responsabilidad política en el terrorismo de Estado.

Cuando a Duarte le ha tocado viajar y visitar a dirigentes políticos amigos nuestros, para congraciarse con ellos ha tenido que referirse a los dirigentes del FDR en términos positivos. Nos ha pedido que regresemos al país a incorporarnos a su "proceso democrático" y ha asegurado que no existen motivos de persecución contra nosotros (Ver, por ejemplo, sus declaraciones en *El País*, Madrid, noviembre de 1985). Pocas semanas después la falsedad de su posición se puso de manifiesto. En diciembre de 1985 amenazó con encarcelar a una delegación de miembros del FDR que hizo público su propósito de ingresar al país para participar en un foro de paz, convocado por la Universidad de El Salvador. Y de ahí en adelante, en numerosas declaraciones ha seguido amenazándonos con la cárcel y pidiendo a los medios de comunicación que no se nos permita ejercer nuestro derecho de expresión del pensamiento.

Nadie da lo que no tiene. Un régimen que no tiene naturaleza, ni carácter democrático, que responde a un proyecto contrainsurgente, y que se

niega a buscar por medio del diálogo una solución de paz, no puede ni democratizar el país, ni ofrecer apertura democrática ni apertura política. Las recientes reformas a la ley electoral para beneficio exclusivo de la democracia cristiana constituyen otro paso anti-pluralista.

Lo anterior nos lleva a examinar el problema de los espacios políticos. Eso es harina de otro costal. Espacios políticos los hay en Chile y Paraguay y también en El Salvador. En nuestra patria, los espacios existentes son para actuar en el campo de la sociedad civil, aunque tengan dimensión política. Los sindicatos, los gremios, las universidades, las asociaciones cívicas o de derechos humanos tienen mayores y mejores posibilidades de acción, aunque reciben represión abierta o encubierta, cuando el régimen no puede o no quiere absorber la protesta social. Por supuesto, la actividad de las derechas, aunque sea progolpista, no recibe respuesta represiva.

Los espacios, en cambio, se reducen cuando se trata de la actividad específicamente política. Ahí entra a funcionar el esquema represivo. No obstante, la lucha popular ha ido abriendo mayores espa-



cios para la acción política y es predecible asumir la perspectiva de que éstos se irán ensanchando con el crecimiento de la movilización popular ante la agudización de la crisis integral.

Por otra parte, el esquema contrainsurgente requiere una cara notable, la cual ha sido proporcionada por la democracia cristiana, de modo que el régimen permite algunos espacios que dan apariencia de cierta democratización. El dilema hamletiano que confronta el régimen actual consiste en que el auge del movimiento popular podrá convertirse en un terremoto político si no se le pone paro con medidas represivas; y si se recurre a la violencia represiva nos enfrentaremos a la dialéctica de la movilización con represión. Pero eso sería la etapa final del fracaso del proyecto contrainsurgente, pues tal como lo ha dicho el propio general Bladón, jefe del estado mayor de la Fuerza Armada, esta guerra no se gana si no se ganan las mentes y corazones del pueblo. Y nuestro pueblo no es masoquista.

5. Viabilidad de una nueva alternativa. Marco histórico y geopolítico

El FDR y el FMLN, aunque representen sectores organizados populares mayoritarios, no pueden por sí solos construir una alternativa nacional viable y duradera, no sólo por consideraciones políticas internas, sino principalmente por razones geopolíticas de cara a Estados Unidos.

El Partido Demócrata Cristiano, con Duarte a la cabeza, ha demostrado un impresionante sectarismo y un pésimo manejo de la política de alianzas, aislándose y hundiendo al país en la más profunda crisis. Con ellos no hay solución posible.

El conjunto de las derechas nos ha enseñado durante décadas que la estructura de poder oligárquico es la responsable de la crisis estructural profunda que se ha ido acumulando y que no tiene un proyecto nacional ni un pueblo que respalde sus intereses grupales.

Por consiguiente, es necesario un esfuerzo más amplio que se exprese en un nuevo entendimiento de fuerzas sociales y políticas, capaz de alcanzar e implementar una solución política nacional. Se trata de una tarea patriótica que debe involucrar al mayor número de sectores y de salvadoreños. La

construcción de un proyecto político nacional es responsabilidad colectiva y requiere la participación de toda organización e institución política y social y de toda persona que busque una solución de paz.

Todos debemos contribuir a la formación de mayores consensos para construir una alternativa democrática viable para nuestra patria. Nuestra actitud y voluntad no son excluyentes ni polarizantes, sino al contrario, incluyentes y pluralizantes, en una búsqueda amplia de entendimiento.

Sobre la base de los consensos iniciales actuales que hemos mencionado antes, el proyecto político debe construirse para satisfacer las necesidades, intereses y aspiraciones de los sectores mayoritarios del país, por medio de sus organizaciones e instituciones representativas en los campos político, económico y social.

La búsqueda activa de ese consenso nacional requiere variados mecanismos e instancias de diálogo y discusión, con un espíritu de debate constructivo que nos permita encontrar, profundizar y extender las coincidencias fundamentales requeridas por un proyecto político nacional. Todos debemos y podemos ser protagonistas.

Con el presente régimen nadie está satisfecho. Los sacrificios y paquetazos de todo tipo que le impone al pueblo, en sus distintos sectores, sólo le proporcionan ventajas a los civiles y militares que usufructúan el poder político y económico proporcionado por los millones de dólares para prolongar la guerra.

Sin paz justa no hay solución y la paz no se puede conquistar sin la participación del FDR y del FMLN. La viabilidad de una nueva alternativa descansa en los avances políticos de los sectores populares y en la derrota clara del proyecto militar contrainsurgente. La tendencia es favorable en ambos aspectos.

Sectores empresariales, especialmente pequeños y medianos, tienen más que ganar con una solución democrática y popular que con la prolongación de la actual situación y crisis. Aun los grandes empresarios pueden comprender que más valen sacrificios y concesiones a cambio de una paz duradera, con la garantía de abrir un juego político en el cual todos los sectores del país puedan tener expresión y la oportunidad de dar su aporte en la

Los espacios se reducen cuanto se trata de la actividad específicamente política. Ahí entra a funcionar el esquema represivo.

reconstrucción del país y en la determinación de las nuevas reglas de convivencia que en buena medida satisfagan sus intereses legítimos.

Es obvio que el sector privado tiene un espacio importante y un papel positivo que desempeñar en la construcción de una nueva sociedad, aunque no exclusivo ni excluyente. Para la realidad concreta de nuestro país, en la cual viven más de 5 millones de salvadoreños, es preciso crear un sistema económico que desarrolle y combine adecuadamente la producción nacional a partir de la organización de tres áreas de propiedad: la privada, la social y la estatal.

Pero más importante que lo económico, el actual sistema está generando toda una crisis moral, todo un sistema de anti-valores. Los valores más fundamentales no tienen ningún sentido en un Estado que trata de aniquilar a todos los que considera que no lo apoyan, incluso sacrificando la vida humana. La tortura se ha elevado a la categoría de valor necesario, en una escala de antivalores que debemos erradicar.

A nuestro juicio una nueva alternativa significa un período de transición que tendrá como características fundamentales una sociedad participativa, pluralista, solidaria y libre, donde veamos a las masas organizadas en el terreno social, gremial, político y donde combinen y compatibilicen todos los aspectos siempre en el sentido de afirmar la autonomía de lo personal y al mismo tiempo afirmarla con la solidaridad social y con la vida participativa en comunidad. Después vendrán los proyectos propios de las diferentes organizaciones políticas.

Falta por ver si existen sectores empresariales importantes que tengan la capacidad y disposición de conjugar sus intereses personales y gremiales con los intereses nacionales, con flexibilidad, inteligencia y sacrificio. Por lo demás, las realidades se constituyen en la mejor maestra y nos enseñan los límites de nuestras posibilidades. Esto es válido pa-

ra todos nosotros, incluso para los empresarios, los militares y hasta para los oligarcas. A buen entendedor, la historia parece estar de parte de los procesos de cambios.

Únicamente nos queda por analizar el marco geopolítico donde nos toca luchar y construir esta alternativa nacional. En otras palabras debemos respondernos si somos sujeto u objeto de la historia; esto quiere decir que si estamos determinados por el imperio o tenemos espacios y posibilidad para avanzar en nuestro desarrollo independiente.

Creemos equivocado plantear el problema en términos absolutos de si lo permitirá o no Estados Unidos; de si es posible lograrlo con Reagan o después de Reagan. La historia se desarrolla de una manera compleja y dialéctica, pero en la vida de los pueblos y de las naciones terminan por prevalecer los factores internos sobre los externos.

Ahora mismo estamos presenciando los límites del poderío de la superpotencia. También observamos que Reagan sufre un proceso de debilitamiento, en un principio de crisis que no sólo es de confianza o de credibilidad, sino de legitimidad y de capacidad para realizar ciertas acciones y ciertas políticas.

Son los factores internos en El Salvador los que van a obligar a cambios en la política del gobierno de Estados Unidos. El empantanamiento evidente de la política de Reagan casi al final de su período presidencial también contribuirá a modificar la situación regional a favor de las fuerzas de la paz y de la convivencia y de la solución negociada de los conflictos.

La comunidad internacional que aún se siente impotente, tendrá más adelante su momento de incidir de manera importante y de contribuir a construir una solución democrática e independiente en El Salvador. Los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano.